

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de San Luis Potosí por el Doctor Ignacio Martinez, contra la providencia del Gobernador sustituto del Estado, Lic. Pascual Hernandez, en virtud de la cual se le condenó á un mes de prision, en castigo de faltas cometidas á la autoridad.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL

C. Juez de Distrito del Estado.

El Promotor dice: que por su pedimento de 9 del pasado, constante de la foja 10 á 13 de esta pieza, tiene ya manifestadas las razones y fundamentos legales por que pidió la suspension del acto de prision impuesta al C. Doctor Ignacio Martinez, por el Ejecutivo del Estado. Por esos mismos fundamentos, el Ministerio hace patente la violacion de garantías individuales ejercida en aquel ciudadano; y como no tengo motivo para cambiar de opinion, porque hasta hoy, lo practicado no induzca por otra parte novedad alguna, reproduce en todas y cada una de sus partes su citado parecer, no obstante la circunstancia de que el quejoso ha sufrido ya la pena que se le impuso, de un mes de prision, y que esto es un motivo para que pueda decirse, que el presente procedimiento ya no tiene objeto, ó que ningunos resultados favorables puede producir al mismo quejoso el término definitivo de este juicio, y cree sin embargo, que á efecto de cumplimentar debidamente lo dispuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, ese Juzgado está en el impresindible deber de prestar todo obediencia á lo dispuesto por la superioridad, sustanciando el juicio de amparo, y devolviendolo en estado, segun que así tambien lo dispone.—Tal es mi parecer, que como siempre someto al mas ilustrado de V. San

Luis Potosí, 22 de Agosto de 1873.—Gregorio Vazquez.

Sentencia del C. Juez de Distrito.

San Luis Potosí, Setiembre 9 de 1873.—Visto este juicio de amparo promovido por el C. Doctor Ignacio Martinez, contra la providencia del C. Gobernador sustituto del Estado, Lic. Pascual Hernandez, que le condenó á \$300 de multa y un mes de prision, por faltas que dice haber cometido respecto de este funcionario y del C. Gobernador propietario, con el hecho de intecalar sus nombres en la lista impresa que publicó de los miembros de "La sociedad potosina," que le negaron su voto para admitirlo en su seno, pidiendo la suspension del acto reclamado; el informe que rindió la autoridad ejecutora y traslado que evacuó el C. Promotor fiscal, para resolver sobre la suspension del acto; el auto definitivo de ese Juzgado fecha 11 de Julio último en que con vista del ocurso, aquel informe y traslado resolvió sobre que no habia lugar á la suspension de la prision del quejoso ni al amparo solicitado; el acuerdo de la Corte Suprema en que devolvió el expediente para que se sustanciase este juicio en lo principal; el informe que rindió la autoridad ejecutora y traslado que evacuó al Ministerio público, con arreglo al artículo 9º de la ley de 20 de Enero de 1869; lo que informaron á la vista la parte del quejoso y el Ministerio público, y todo lo demas que consta de autos, se tuvo presente y verconvino.

Considerando: que las actuaciones posteriores no han hecho adelantar mas en este asunto, porque tanto la autoridad ejecutora del acto reclamado, como el Promotor fiscal, se refieren en un todo á su primer informe y traslado.

Que versándose en este caso un punto de derecho, no hubo necesidad de abrirlo á prueba, ni las partes lo pidieron, ó bien que los

hechos objeto de este juicio están claramente precisados en el primer informe, que no ha objetado el actor.

Que consistiendo la queja del C. Doctor Ignacio Martinecz, en la suspension de una multa de \$ 300, y un mes de prision, aparece del informe que solo se redujo el castigo á un mes de prision, circunstancias que hizo variar la accion aducida.

Que reducida la cuestion á si la autoridad política ó administrativa puede imponer un mes de prision por faltas que real ó ficticiamente se le han cometido, debe resolverse afirmativamente, por que es facultad que le otorga la Constitucion en su artículo 21 sin que obste en contrario la arbitrariedad ó abuso de poder con que procede, por que contra esto existe otro remedio de que puede usar el quejoso en la vía y forma que establecen las leyes relativas.

Que la Constitucion ha querido dar esa facultad á la autoridad política ó administrativa para conservar el prestigio y la respetabilidad de que tanto necesita y le deben los individuos, segun se expresa el C. Castillo Velasco en su obra relativa, á fojas 59 y 60.

Que por esa razon y la naturaleza del poder ejecutivo que exige sea pronta y eficaz su accion, debe dejarse á su sola calificacion, la designacion de lo que en su concepto sean faltas, porque admitir otra cosa expondria al poder mencionado á que cada paso que diese, haciendo uso de facultad del artículo 21, se veria entorpecido por un juicio de amparo, y si habia de comenzarse por la suspension del castigo, mientras se resolvia si habia ó no faltas propriamente dichas, si se otorgaba ó no el amparo, la accion del poder se veria de hecho nulificada y sin efecto el artículo 21 repetido.

Que de lo expuesto se deduce, que el uso ó abuso de la facultad que otorga ese artículo debe considerarse una limitacion de las garantias individuales, por lo cual no cabe el amparo respecto de ella, y en el presente

TOMO V.—PARTE II.

caso, no importa violacion alguna de las garantias aducidas en el escrito de demanda.

Que no se ha violado el artículo 79, porque en el acta levantada al efecto calificó el C. Gobernador sustituto de faltas de respeto á su autoridad, la persistencia en su presencia oficial, del C. Martinez en sostener lo que tenia dicho por la prensa.

Que aunque no esté reglamentado el artículo 21 de la Constitucion, es interpretacion constante que puede la autoridad política imponer la multa ó prision que señala, porque de otra suerte caería de los medios eficaces de accion para hacerse respetar y conservar incolume su prestigio, que tan imperiosamente reclama el interes general.

Que no puede decirse por lo expuesto: que se ha violado tampoco el artículo 14, porque el Poder ejecutivo del Estado ha impuesto la prision por vía de correccion, manteniéndose dentro de los límites del artículo 21.

Que tampoco puede objetarse que el ejecutivo se fundó en el artículo 54 fraccion 17 de la Constitucion del Estado, que no es la Constitucion federal, porque en tanto aquella está en vigor, en cuanto se mantiene en armonía con esta.

Por tales consideraciones, y atento el auto de 11 de Julio último, me debía limitar á repetir: Que la Justicia de la Union no ampara ni protege al C. Doctor Ignacio Martinecz contra la providencia del C. Gobernador sustituto del Estado que le condenó á un mes de prision.

Hágase saber; publíquese en los periódicos, y elévense estas actuaciones á la Suprema Corte de Justicia para su revision.

Así lo decretó y firmó el C. Juez de Distrito del Estado, C. Licenciado Conrado Dias Soto, por ante mí. Doy fé.—Firmado.—*Conrado Diaz Soto.*—*Donaciano Monroy*, secretario.

Es copia que certifico. San Luis Potosí, Setiembre 30 de 1873.—*Donaciano Monroy*, secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Octubre 2 de 1873.—Visto el recurso de amparo que en 5 de Julio del corriente año promovió en la ciudad de San Luis Potosí, ante el Juez de Distrito del Estado del mismo nombre el Doctor Ignacio Martínez, contra la providencia del Gobernador sustituto del Estado, Lic. Pascual Hernandez, por virtud de la cual se le condenó á un mes de prision en castigo de faltas cometidas contra la persona del mismo Gobernador sustituto, y contra la persona del Gobernador propietario, incluyendo con agravios los nombres de estos funcionarios entre otros que forman un impreso dado al público, con cuya providencia alega el Doctor quejoso que se han violado en su persona las garantías que otorgan los artículos 7º, 13, parte 2ª y 21, parte 2ª de la Constitución federal.

Vistas las constancias de autos, y teniendo en consideracion, que las faltas cometidas por el Doctor Martínez contra las autoridades dichas, segun el impreso referido, acusan un delito de imprenta del conocimiento exclusivo de las autoridades correspondientes, segun el artículo 7º de la Constitución de la República, y la ley orgánica respectiva: que no ha sido ninguna de estas autoridades la que conoció en el negocio de que se trata, y se ha omitido el procedimiento que para un caso de imprenta es debido, conforme á las disposiciones acabadas de citar.

Por los fundamentos expuestos, que demuestran haberse violado con el castigo del Doctor Martínez, las garantías que á este otorga el artículo 7º de la Constitución federal, y con apoyo de la ley de 20 de Enero de 1869, se resuelve: Primero: se revoca la sentencia que en 9 de Setiembre último pronunció el Juez de Distrito de San Luis Potosí, declarando: que la Justicia de la Union no ampara ni protege al Doctor Ignacio Martínez, contra la providencia del

Gobernador del Estado que lo condenó á un mes de prision. Segundo: la Justicia de la Union ampara y protege al referido Doctor contra la providencia mencionada, en virtud de la cual promovió el presente recurso de amparo.

Devuélvanse las actuaciones al Juez de Distrito que las elevó en revision, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos, y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—José M. Iglesias.—Pedro Ogazon.—Juan J. de la Garza.—José M. Lozano.—José Arteaga.—P. Ordaz.—M. de Castañeda y Nájera.—J. M. del Castillo Velasco.—Simon Guzman.—Luis Velazquez.—José García Ramirez.—Luis M. Aguilar, secretario.

Es copia que certifico. México, 13 de Octubre de 1873.—Lic. Enrique Landa, oficial mayor.

CRIMINAL.

Causa instruida en el Juzgado de Distrito de Puebla contra Fermín Fuentes, Celso Martínez, Hipólita Romero, Genara Lopez y Guadalupe Torvar, por el delito de fabricacion de moneda falsa.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

Segun se vé en la coleccion de leyes formada y anotada por el C. Lic. Blas José Gutierrez, á la foja 177 del tomo segundo, parte segunda, el delito de falsificacion de moneda es considerado por los criminalistas como crimen de lesa nacion, y es de reputarse *hurto muy grave hecho al erario pú-*